

Resolución

La educación “apolítica” es la más política de todas las educaciones

En Galicia, el Gobierno del PP ha recuperado el discurso de la “neutralidad ideológica” en el ámbito educativo y ha adoptado decisiones que han generado una profunda preocupación en una parte de la comunidad educativa. La presión ejercida sobre centros participantes en iniciativas críticas con el proyecto de Altri, el veto al debate de una resolución sobre Palestina en el Consello Escolar de Galicia, la denegación de la homologación a una actividad histórica de Nova Escola Galega sobre educación para la paz o el reciente nombramiento del nuevo director territorial de Educación en A Coruña, cuestionado por amplios sectores sociales por no contar con una trayectoria vinculada al ámbito educativo y estar rodeado de polémicas incompatibles con los valores democráticos, de igualdad y de servicio público que deben presidir la administración educativa. Son ejemplos de una orientación política que puede contribuir a limitar el pluralismo, la autonomía pedagógica y la capacidad crítica de los centros. Es más necesario que nunca mantenerse vigilantes ante cualquier intento de utilizar la apelación a la neutralidad ideológica para restringir el debate educativo y la formación en valores democráticos.

Esto está pasando también a nivel estatal donde se empiezan a tratar los temas educativos como si fueran problemas de seguridad. En el *Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos*, del Ministerio de Interior del actual gobierno, se legitima la presencia de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en centros educativos de todo el Estado español. De acuerdo a esta lógica, los enfoques pedagógicos y educativos de convivencia se redefinen como cuestiones de “seguridad” que exigen la intervención de policía y guardia civil en los centros.

Policía del pensamiento en los centros

La Federació d'Educació de CCOO de Catalunya se opuso igualmente a la medida impuesta por la Generalitat de Catalunya de establecer [presencia permanente de un policía](#) (disfrazado de paisano) en determinados centros escolares, que la Generalitat ha señalado como centros de máxima complejidad. Disfrazando también este plan con un nombre eufemístico (Plan Integral para la Seguridad y el Bienestar en el Entorno Educativo).

Esta deriva autoritaria global, que señala y estigmatiza a los centros públicos de entornos más vulnerables y criminaliza al alumnado que en ellos está, se puede ir normalizando progresivamente. El neofascismo está marcando así la agenda política a nivel global, utilizando la dichosa “ventana de Overton”, también en

educación. Lo impensable se vuelve debatible para, a continuación, hacerlo normalizable y finalmente, incluso, legislable. Se pretende así normalizar la autoridad policial como actor educativo, naturalizando la presencia de policías, guardias civiles y militares en los centros y transformando así progresivamente la naturaleza de la escuela como espacio eminentemente educativo y formativo en lugar también de control y normalización de la ideología y narrativa bélica, en la que el “orden social” aparece ligado a la vigilancia y a la intervención policial. Imponen así una forma de gestión tecnocrática y punitiva de la convivencia y los conflictos sociales que evita cuestionar sus causas socioeconómicas profundas y refuerza la idea de que estos deben ser contenidos más que resueltos de forma pedagógica.

Estos son ejemplos que muestran cómo se ha desplazado la “ventana de Overton” y se normaliza la barbarie en el seno del propio sistema educativo. Vemos cómo la extrema derecha y la derecha extrema han iniciado, con total impunidad, una nueva “caza de brujas” contra todo pensamiento y acto que cuestione el sistema dominante: bajo discursos de “protección a la infancia”, “defensa de la familia” o “libertad académica”, se persigue el pensamiento y las acciones que cuestionen el capitalismo neoliberal, el patriarcado, el colonialismo o la propia idea de justicia social. El viejo espíritu del macarthismo —que en Estados Unidos silenció a intelectuales progresistas con la excusa del miedo al comunismo— ha convertido la educación en uno de los principales campos de batalla.

Se suceden procesos de estigmatización, despidos, censura y persecución judicial contra docentes, personal investigador o estudiantes que introducen perspectivas críticas o disidentes. La diferencia clave es que hoy la/el disidente es el/la docente que analiza las desigualdades estructurales de clase social, la/el estudiante que organiza un debate sobre el racismo sistémico, la comunidad educativa que denuncia el genocidio palestino o el sindicato que impulsa acciones contra el extractivismo capitalista. El “demonio” es ahora el “marxismo cultural”, el “adoctrinamiento” o cualquier etiqueta que sirva para deslegitimar saberes incómodos.

En el macarthismo se hacían listas negras de simpatizantes comunistas o de personas que, simplemente, mostraban posicionamientos críticos ante la realidad social y económica y se creó un clima de paranoia donde cualquier crítica al “modelo americano” era sospechosa de traición. En el nazismo se produjo la quema de libros, la purga de profesorado judío y socialista, la sustitución de la ciencia por ideología racial y el adoctrinamiento juvenil como prioridad estatal. Hoy [se vetan libros en escuelas](#), se persigue a docentes por expresar opiniones críticas, se [censuran encuentros internacionales de educadores](#) ante el genocidio en Palestina o se imponen leyes que penalizan el supuesto “adoctrinamiento” en las aulas.

La educación como campo de batalla

La educación no es, ni ha sido nunca, un espacio neutral. Siempre hay intereses en juego sobre qué se enseña y qué se calla. La cruzada actual contra la “ideología de género”, contra la “perspectiva decolonial” o contra la “educación ambiental crítica” responde a una misma lógica: evitar que las nuevas generaciones desarrollen herramientas para cuestionar el sistema económico y político vigente.

La educación se ha consolidado como un campo estratégico en las disputas ideológicas del siglo XXI. Para la extrema derecha, pensamiento crítico es aquel que solo critica cualquier posición ideológica que no legitima los principios neocapitalistas, no al mercado, ni al patriarcado, ni al colonialismo. Esta inversión semántica es propia de la caza de brujas: la víctima es convertida en victimario. La enseñanza que promueve igualdad es acusada de “discriminación inversa”; la que explica el conflicto social es etiquetada como “violencia ideológica”; la que analiza el cambio climático como crisis sistémica es descalificada como “ecologismo extremo”.

El neofascismo acusa a la educación pública (no a la concertada) de un supuesto “sesgo ideológico” en la educación, al tiempo que promueve iniciativas orientadas a redefinir los límites del conocimiento legítimo, impugnando contenidos curriculares vinculados a perspectivas críticas (feminismo, antirracismo, memoria histórica democrática, impactos del cambio climático), impulsando marcos normativos que limitan la autonomía docente¹, expandiendo narrativas sobre la “neutralidad ideológica” de la escuela, que en la práctica operan como mecanismos de exclusión de determinados enfoques y deslegitimando el conocimiento experto y de las instituciones académicas. Estas dinámicas buscan reconfigurar la hegemonía cultural y generar climas de autocensura entre el profesorado y las propias comunidades educativas mediante *leyes mordaza* que disuaden el pensamiento divergente.

La cuestión central no es, por tanto, si la educación es política —lo es inevitablemente—, sino qué tipo de proyecto político, social y pedagógico orienta su desarrollo.

Resistencia pedagógica

Las derechas extremas han aprendido a usar las redes sociales y los pánicos morales episódicos (como el debate sobre la “educación sexual” o la regularización de las personas migrantes) para imponer sus agendas sin necesidad de dictaduras formales. La historia no se repite, pero rima, dice el tópico. La caza

¹ La Inspección Educativa, ha procedido a incoar un [expediente a la maestra Marta González de Eiris Martín, docente del CEIP Manuel Núñez de Arenas](#), por una supuesta desobediencia vinculada a la organización en grupos multinivel durante el periodo en que ejercía como directora del centro.

de brujas medieval, el macarthismo, el nazismo y el franquismo son distintos fenómenos con un mismo patrón: identificar a un enemigo interno, deshumanizarlo y purgar su influencia de las instituciones. Hoy, ese patrón reemerge de forma dispersa, pero coordinada a nivel global, impulsado por partidos y movimientos de extrema derecha que tienen en la educación uno de sus principales objetivos.

Por eso la defensa de una educación democrática, crítica, plural y emancipadora se convierte en una lucha política central de nuestro tiempo. Desde la Federación de Enseñanza de las Comisiones Obreras llamamos a la acción de toda la comunidad educativa porque estamos todavía a tiempo de apagar las hogueras antes de que quemem también los libros y las conciencias.